

INTRODUCCIÓN.

El contexto de crisis y el cambio de época

INTERNET Y POLÍTICA

Este estudio parte de la convicción, ya anunciada, de que no atravesamos sólo una época de cambios, sino un cambio de época. Y que ello puede percibirse y constatarse analizando las relaciones entre Internet, política y jóvenes. Sabemos que la crisis económico-financiera de 2007, combinada con la revolución tecnológica que significa Internet, y las herramientas 2.0, son factores de cambio muy significativos. Pero, el cambio de época que atravesamos es más complejo y tuvo sus inicios en los años setenta del siglo XX. En esa parte final de siglo, se cuestionaron las formas de encarar el conflicto social, el protagonismo del Estado y sus formas de operar. Surgen desde ahí distintas líneas y vectores de cambio que poco a poco primero, y con gran rapidez últimamente, empiezan a sentar bases distintas de relación entre sociedad, Estado y mercado. Nos encontramos, a principios del siglo XXI, ante una nueva sociedad mucho más heterogénea, diversificada e individualizada, con unos problemas mucho más complejos. Las formas tradicionales de gobierno y los mecanismos convencionales de participación política, tienen un grave problema de funcionalidad frente a este nuevo y cambiante escenario.

Sin embargo, los problemas de funcionalidad no son los únicos que ponen en duda la viabilidad de dichas formas de gobierno. En paralelo a la incapacidad de los gobiernos para dar respuestas eficaces a los nuevos problemas se manifiesta también una crisis de legitimidad. El Estado del Bienestar acabó reforzando un modelo de “democracia por delegación” en el que la ciudadanía entrega a los responsables políticos una provisión tecnocrática de servicios públicos, mientras estos conciben a los ciudadanos únicamente como “clientes” de estos servicios. Unos “clientes” que cada cuatro años se convierten en votantes. Esta dinámica, aquí someramente descrita, ha contribuido a un creciente alejamiento entre “la política de las instituciones” y la ciudadanía.

Si bien es cierto que el Estado del Bienestar y las formas de gobierno tradicionales fueron problematizados desde el último tercio del siglo XX, la realidad es que este modelo de Estado ha sobrevivido hasta nuestros días, aunque con alteraciones importantes en algunos países. Sin embargo, la crisis actual pone en evidencia las enormes dificultades para mantener y reforzar esa lógica de bienestar colectivo y de redistribución como respuesta a las desigualdades. Al mismo tiempo, los problemas de legitimidad se han acentuado también como consecuencia de la situación actual, en la que la crisis económico-financiera de 2007 ha descosido mucho de los equilibrios trabajosamente construidos entre mercado, Estado y sociedad.

La crisis impactó directamente sobre el equilibrio logrado por el Estado del Bienestar entre la economía de libre mercado y las políticas sociales de redistribución, poniendo de manifiesto las dificultades para sostener un modelo de Estado basado en la generación de bienestar colectivo desde bases fiscales propias del Estado-nación. Y, por tanto, poco preparadas para asumir los

efectos de la mundialización económica y el mercado global financiero. Las políticas de austeridad adoptadas por la gran mayoría de los gobiernos europeos han multiplicado los efectos de la recesión, incrementando las desigualdades sociales. Con ello se ha incrementado exponencialmente la percepción de la ciudadanía sobre la incapacidad de la política institucionalizada (de los gobiernos) para dar respuesta a sus problemas cotidianos. En otras palabras, la crisis de funcionalidad de la política institucionalizada ha aumentado hasta tal punto que, hoy en día, una gran mayoría de los ciudadanos del sur de Europa percibe a “los políticos” como parte del problema y no como parte de la solución. La falta de transparencia en la gestión de la crisis y en muchos de los procesos que la originaron, la proximidad entre intereses políticos e intereses del sector financiero y la aparición de múltiples casos de corrupción han contribuido, sin duda alguna, a que se hable no sólo de una crisis económico-financiera sino también de una crisis del propio sistema democrático.

Mientras ambas crisis impactan significativamente en nuestras vidas, la revolución tecnológica de Internet llegaba a su punto álgido con las herramientas 2.0, y muy especialmente con la extensión de las redes sociales. Un cambio que, como mostraremos, no sólo está transformando nuestras formas de relación sino que, además, cuestiona todas las estructuras de intermediación (incluido el Estado) y abre la puerta a nuevas formas de participación política. Es evidente que la proliferación y generalización de Internet en el entorno más personal, lo han convertido en una fuente esencial para relacionarse, informarse, movilizarse o simplemente vivir. Como resultado de todo ello, los impactos han sido y empiezan a ser cada vez más significativos también en los espacios colectivos de la política y de las políticas. Internet está favoreciendo cambios en el proceso de elaboración, formación e implementación de las políticas públicas, y está obligando a resituar la posición y el rol de los poderes públicos y de las administraciones que de ellos dependen.

Aún así, las instituciones públicas, las políticas y las administraciones tienden a mantener sus pautas de acción, como si el nuevo contexto social y político fuera algo meramente temporal o no significara cuestionamientos esenciales a la forma de proceder. Las instituciones públicas, las políticas y las administraciones siguen en buena parte ancladas en la lógica que sintetizó Jellinek (1978): territorio, población, soberanía. Unos vínculos territoriales y de población que fijan las competencias y el marco regulatorio, pero que hoy resultan muy estrechos para abordar lo que acontece. Las causas, las consecuencias y las respuestas a los problemas colectivos hoy en día pasan, sin duda alguna, por la articulación de flujos y relaciones entre lo global y lo local, entrando constantemente en contradicción con las bases mismas y las lógicas de actuación de los Estados-nación. Frente a ello, los nuevos formatos de participación ciudadana promovida por las instituciones públicas ya no funcionan. De hecho, hemos observado recientemente cómo muchas de las administraciones públicas que habían liderado este tipo de experiencias de gobernanza participativa han dejado de promoverlas y/o han reducido su intensidad, ya sea como consecuencia de las crecientes restricciones presupuestarias o por un cambio de sus prioridades. Simultáneamente, observamos también como cada vez proliferan más los ejemplos de iniciativas ciudadanas que, ya sea desde el “no nos representan” del movimiento 15-M o desde la percepción de que la administración no está siendo capaz de resolver sus problemas cotidianos, optan por nuevas formas de auto-organización basadas en la cooperación y la colaboración entre ciudadanos al margen (o en contra) del Estado.

Constatamos, pues, que ni las formas tradicionales de gobierno propias de las democracias liberales-representativas ni las nuevas formas de gobernanza, que han incorporado elementos de democracia participativa, se vislumbran hoy en día como capaces de dar respuestas satisfactorias frente a la crisis y reducir el distanciamiento entre la sociedad y las instituciones públicas. Está emergiendo, en cambio, un modelo de democracia basado en la aceptación y reconocimiento de la diversidad, en el que el interés público (general) no tiene por qué imponerse de manera jerárquica a los múltiples intereses colectivos. Se entiende, pues, que los intereses colectivos, aunque no sean mayoritarios, son también intereses comunes, compartidos entre diversos ciudadanos y ciudadanas que colaboran entre sí pensando en lo común y no en lo individual.

En síntesis, y en contraposición a las formas de gobierno precedentes, podemos distinguir los siguientes rasgos característicos de estas nuevas formas de participación política desde abajo y con amplio uso de Internet y de las redes sociales:

- Radicalidad democrática. Se inspiran en un modelo de democracia basada en el respeto a la diversidad y la gestión de “lo común” en base a la agregación de intereses colectivos, sin que éstos sean oprimidos por las visiones dominantes del Estado y del mercado.
- Colaboración. Estas nuevas formas de participación política huyen de la jerarquía y tienen un carácter horizontal y compartido, estructurándose a partir de la colaboración entre ciudadanos que comparten preocupaciones, visiones, objetivos... Así, ya no hablamos de actores con intereses particulares que establecen entre sí unas relaciones más jerárquicas o más horizontales, sino de actores y ciudadanos que se relacionan y colaboran entre sí porque tienen objetivos comunes.
- Conectividad. Una de las características más esenciales de estas nuevas formas de participación desde abajo es la minimización (o eliminación) de las estructuras de intermediación. Lo relevante no es la organización sino la agregación de ciudadanos con intereses comunes y, en consecuencia, el factor clave es la capacidad para conectar esos ciudadanos. Internet es la plataforma que hace que esas formas organizativas sean posibles.
- Presión e implementación. Las nuevas formas de participación política desde abajo se fundamentan en una determinada visión del mundo, comparten preocupaciones y objetivos y buscan tener una incidencia sobre la esfera pública. En este sentido, movilizaciones como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o contra la llamada “Ley Sínde” son un claro ejemplo de ello. Al mismo tiempo, sin embargo, muchas de estas experiencias tienen una lógica claramente implementativa, buscando resolver los problemas colectivos que el Estado no es capaz de solucionar. Iniciativas como las cooperativas de distribución energética o agroalimentaria, los huertos urbanos, la autogestión de espacios vacíos, u otras experiencias colaborativas ejemplifican esta dimensión implementativa.
- Glocalización. Muchas de estas experiencias de innovación social actúan desde una lógica que combina la escala local con la global. Así, encontramos iniciativas locales para gestionar las consecuencias de problemas globales, iniciativas que buscan re-escalar y ubicarse en escalas superiores, e iniciativas de distintos territorios que entran en contacto o que se reproducen por encima de los Estados-nación y sin tener en cuenta la organización geográfica de las administraciones públicas.

Parece pues claro que, en paralelo a la multiplicación y la diversificación de las formas de hacer política, las relaciones entre la administración y la ciudadanía se están transformando. El Estado parece estar perdiendo buena parte del protagonismo político que había alcanzado en la época de bienestar, al mismo tiempo que se refuerzan otras formas de implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos, otras formas de participación política y de acción colectiva. Algunas de estas formas de participación política son bien conocidas (como las huelgas, las manifestaciones...), aunque quizás hayan ido perdiendo peso en los últimos años. Muchas otras, sin embargo, son innovadoras y responden a las características de una sociedad mucho más diversa y fragmentada que dispone de nuevos instrumentos de relación y que está experimentando con nuevas formas de organización social.

Como ya hemos ido avanzando, uno de los factores de transformación más significativos de las últimas décadas ha sido la aparición de Internet, un cambio tecnológico que ha propiciado, facilitado y acelerado muchas de las transformaciones que hemos comentado. Pero, ¿ha sido realmente significativo el impacto de Internet en los procesos de intervención política y administrativa?

Más allá de la poca capacidad de adaptación de las instituciones públicas a ese nuevo escenario global, observamos cómo éstas tampoco están aprovechando el gran potencial que se deriva del cambio tecnológico. Así, en la mayoría de los casos, las administraciones públicas tienden a utilizar Internet meramente como una nueva herramienta para seguir haciendo lo que ya hacían pero de forma más eficiente, pues a través de los medios digitales ahorran tiempo, papel e incluso recursos humanos. Sin embargo, no están utilizando las nuevas tecnologías para transformar profundamente la forma de organizarse y de producir políticas públicas, sino que se utiliza Internet como una forma más para mejorar las rutinas operativas, en la línea del paradigma de la “nueva gestión pública”.

Es cierto que desde las administraciones públicas se ha buscado incorporar Internet en su proceder, incluso con voluntad de profundización democrática con expresiones como “e-democracy” o “e-government”. Sin embargo, el potencial democratizador de estos paradigmas se limita a las posibilidades de Internet para mejorar los mecanismos de información y de transparencia a disposición de la ciudadanía, a fin de que puedan ejercer de manera más completa y eficaz sus posibilidades de elección y disponer asimismo de más influencia en sus relaciones con las burocracias públicas. En la gran mayoría de casos, pues, no se pone en cuestión ni lo que se hacía, ni la forma de hacerlo, sino que únicamente se busca en el nuevo recurso tecnológico una forma más eficiente, más ágil, más rápida de llevar a cabo las rutinas procedimentales previas.

Así, si Internet no ha transformado las administraciones públicas, ¿cuál ha sido su impacto en la política? A nuestro entender, tal y como afirma Mark Poster (2007), Internet no es un nuevo “martillo” para clavar mejor los “clavos” de siempre. Internet modifica la forma de relacionarnos e interactuar, altera profundamente los procesos y posiciones de intermediación, y genera vínculos y lazos mucho más directos y horizontales, a menores costes. En consecuencia, el cambio que está significando para nuestras sociedades (y las implicaciones políticas de este cambio) van mucho más allá de una simple modernización tecnológica del instrumental operativo de las administraciones públicas. Internet posibilita la alteración de las relaciones de poder, el cambio en las estructuras

organizativas, en los procedimientos administrativos y en las jerarquías e intermediaciones establecidas. En este sentido, no sería descabellado decir que Internet podría estar dibujando un nuevo orden social y político.

Más que las administraciones públicas, es la sociedad civil la que está aprovechando mejor las nuevas oportunidades que ofrece Internet para alterar el orden pre-establecido. En este sentido, el primer impacto que queremos destacar de Internet sobre la política es que ha contribuido (aunque no sea el único factor explicativo) a cambiar la concepción y la práctica de la política más allá de las instituciones de carácter público. Cada vez es más habitual encontrar experiencias de carácter político que desbordan el marco constitucional propio de las democracias parlamentarias. Se trata de vías alternativas que no surgen de las instituciones del Estado sino que nacen desde la ciudadanía y beben de una concepción plural y abierta de las responsabilidades colectivas, partiendo de la base de que estas responsabilidades compartidas deben perseguir la resolución de problemas de carácter colectivo sin que esto quiera decir que el Estado deba ser quien necesariamente asuma la única responsabilidad en el abordaje de “lo común”. En otras palabras, estamos delante de una concepción amplia de la política en la que la gestión de lo colectivo (de lo público) no se limita exclusivamente a lo institucional (entendiendo aquí lo institucional como lo que atañe al Estado). En este sentido, Internet no sólo estaría abriendo la puerta a nuevas formas de participación política al margen del Estado sino que, sobre todo, estaría posibilitando que se ponga en cuestión la forma de operar de la democracia constitucional y parlamentaria, con sus mecanismos de participación centrados esencialmente en partidos y elecciones.

INTERNET, POLÍTICAS Y ACCIÓN COLECTIVA

Pero, ¿realmente está Internet modificando la escena política, alterando las relaciones de poder, incidiendo en la forma de entender la producción de políticas públicas y obligando a repensar los procesos de acción colectiva tal como los habíamos caracterizado?

En primer lugar, entendemos que Internet ha permitido que se produzca una multiplicación y una diversificación de los actores políticos. El propio concepto de actor se ha utilizado tradicionalmente en la Ciencia Política como el de un “intermediador” organizado capaz de estructurar determinados intereses. Los partidos políticos son, en este sentido, los actores políticos más claramente reconocidos como tales por parte del entramado institucional y constitucional de las democracias contemporáneas. Justamente por su rol de intermediación entre la ciudadanía y las esferas de toma de decisiones, los actores políticos han jugado un papel clave en la elaboración de las políticas públicas. Su capacidad organizativa les ha permitido incidir en la política. Así, en el esquema clásico de elaboración de políticas públicas se articulaban redes de actores (*policy networks*) con intereses sobre la política en cuestión. Estas redes de actores estaban configuradas por actores públicos (instituciones públicas) que tenían la responsabilidad de acción y actores no-públicos que buscaban influir en la política y que interactuaban entre sí y con los actores públicos para determinar la política concreta que finalmente sería implementada. Internet transforma totalmente este escenario ya que la articulación de personas con intereses compar-

tidos es más fácil, al no requerir de un alto grado de organización. Así, convertirse en un nuevo actor es mucho más fácil, hasta el punto que el propio concepto (estable y organizado) de “actor” puede llegar a ponerse en duda. Esto no significa que los actores tradicionales desaparezcan. Se mantienen en la escena política pero tienen que compartir ese escenario con nuevos actores y nuevas formas de actuar, mucho más flexibles, dinámicas y de rápida creación. Al mismo tiempo, la facilidad con la que pueden crearse conglomerados de ciudadanos/as con objetivos comunes facilita que éstos se agrupen alrededor de intereses mucho más específicos, pues no es necesario que compartan nada más que aquello que les ha unido en ese momento concreto. Con ello, no sólo se multiplican los actores, sino que también se diversifican los intereses que consiguen entrar en juego.

En segundo lugar, Internet ha logrado reducir de forma muy significativa los costes de la acción colectiva. La ciudadanía tiene hoy menos costes de organización y movilización (capacidad de identificar intereses comunes, de difundir mensajes, capacidad de comunicación, decisión-liderazgo mediante procesos de inteligencia colectiva y coordinación), así como una menor necesidad o dependencia de recursos monetarios, de acceso a los medios de comunicación de masas y de grandes inversiones de capital para organizarse. Con Internet, el recurso principal pasa a ser la conectividad y la capacidad de relacionarse con otros a través de la Red, mientras que otros recursos que tradicionalmente eran muy relevantes (como la disponibilidad de tiempo o de dinero) hoy pasan a un segundo nivel.

En tercer lugar, Internet está permitiendo una redistribución de los recursos entre los actores y, en consecuencia, una alteración de las relaciones de poder. Antes era necesario un alto grado de organización y una buena dotación de recursos de distinta índole para lograr entrar en la arena política e incidir en las políticas públicas. Hoy en día eso ya no es necesario ya que con Internet es posible movilizar a muchos ciudadanos e incidir en la opinión pública sin un alto grado de organización y con pocos recursos. La Red facilita el acceso al conocimiento, facilita compartir recursos y facilita la colaboración. Con ello la ciudadanía (y también los actores colectivos) cuentan con más recursos cognitivos y con una mayor capacidad de producción conjunta de conocimiento, de información y de estrategias de acción. Así, se redistribuyen los recursos y pueden alterarse las relaciones de poder. La capacidad para influir en la política ya no está sólo en manos de los actores tradicionales más organizados. Estos están perdiendo poder en favor de ciudadanos y ciudadanas anónimos que, a través de Internet, no sólo están logrando jugar un papel en determinadas políticas públicas sino que también están logrando empoderarse y actuar al margen del Estado, con una lógica implementativa, en la resolución de problemas colectivos.

Y por último, aunque no por ello menos importante, se diversifican los repertorios de acción colectiva. La redistribución de recursos y la alteración de las relaciones de poder, en gran medida, se produce por efecto de los nuevos repertorios de acción colectiva que permite Internet. Con Internet se abre un gran abanico de oportunidades para innovar con nuevas formas de acción colectiva basadas en la conectividad de ciudadanos y ciudadanas con objetivos compartidos: difusión y convocatorias a través de las redes sociales, recogida de firmas *online*, mensajes masivos a responsables políticos, etc. En términos de Bennet y Segerberg (2012) se está pasando de la acción colectiva a la acción conectiva, un tipo de acción que con un coste mucho menor permite

agregar a un número mucho mayor de ciudadanos y colectivos, pudiendo lograr unos niveles de visibilización pública y de impacto político mucho más grandes. Las nuevas formas de acción colectiva están muy vinculadas a las características de los nuevos actores que emergen: no disponen de una estructura organizativa propia, no están permanentemente en un proceso de interacción y su acción está más basada en la relación que en el interés compartido. En consonancia con ello, la acción que desarrollan se produce a través de momentos de agregación colectiva en Red, sin interlocutores estables y claramente definidos. Su fuerza no está en la cantidad de gente que puedan “representar”, sino en su capacidad de “interconectar” y aglutinar la opinión pública en Internet, acrecentando la presión ciudadana (en Internet y más allá de Internet).

En definitiva, Internet permite agregar intereses comunes de forma directa y a un coste bajo. Ello está facilitando el surgimiento de nuevos actores que agregan ciudadanos en base a intereses muy diversos y, al mismo tiempo, está redistribuyendo los recursos entre los distintos actores, permitiendo que con pocos recursos se puedan lograr grandes impactos. Esta mayor capacidad de agregación de intereses comunes en red ha permitido a los nuevos actores no depender obligatoriamente de los intermediarios o actores tradicionales que venían representando los intereses sociales (sindicatos, partidos políticos, ONGs, etc.). De esta manera pueden tener presencia directa en los debates de conformación de la agenda pública y disponer de una capacidad de incidencia mucho más directa sobre el proceso de elaboración de las políticas públicas. Al mismo tiempo, Internet también está desbordando a los medios de comunicación de masas como *gatekeepers* privilegiados y está abriendo nuevas vías tanto para incidir directamente en la agenda pública como para alterar la agenda de los propios medios de comunicación de masas.

La movilización ciudadana a través de Internet es capaz de introducir temas en la agenda política que de otra forma no habrían entrado; puede configurar la definición de los problemas a los que se enfrenta una determinada política a través de la difusión mediante Internet de contenidos y argumentos, puede movilizar a la ciudadanía proponiendo respuestas u oponiéndose a las acciones planteadas por las instituciones públicas y puede permitir un seguimiento de la acción institucional, desde fuera de las administraciones públicas y con acciones colaborativas de evaluación de sus resultados. Por todo ello, los procesos de conformación de las políticas son hoy mucho más complejos e impredecibles (Subirats, 2011).

Aún no disponemos de instrumentos analíticos suficientemente afinados para seguir, desde la perspectiva de la investigación en Ciencias Sociales, los procesos surgidos de Internet que inciden en la política y en la formulación de las políticas públicas. Al no existir espacios claros de intermediación, al margen del propio Internet, la interacción se produce de manera aparentemente caótica y agregativa, con flujos poco predecibles y con capacidades de impacto que no pueden, como antes, relacionarse con la fuerza del actor o emisor de la demanda, sino con su grado o capacidad para conseguir distribuir el mensaje, presentarlo con el formato adecuado, y conseguir así alianzas que vayan mucho más allá de su “hábitat” ordinario. Obviamente, la gran pluralidad de intervinientes (dada la dimensión potencialmente universal del perímetro implicado), hace que la importancia que se dé a un problema pueda ser mucha o poca, con notables dosis de aleatoriedad. La tendencia a convertir en “nuevos” ciertos temas de largo recorrido, es también visible, dada la novedad del propio medio en que circula la información y el hecho que el grado de

expertise sobre cualquier asunto puede ser de lo más variado imaginable. Algunas investigaciones se han llevado ya a cabo y pueden ser útiles en el futuro desde el punto de vista metodológico (Salcedo, 2012; Fuster Morell, 2010).

Por último, las nuevas formas de experimentación democrática en el abordaje de “lo común” desde abajo, sin que el Estado ocupe un papel de centralidad, requieren también de nuevos enfoques analíticos que vayan más allá del análisis y la evaluación de políticas institucionales y conciban “lo público” como lo común y no únicamente como lo que atañe a las administraciones públicas. Desde esta perspectiva, la participación de la ciudadanía en la esfera pública ve reforzada su dimensión como “práctica social” y, en consecuencia, las Ciencias Sociales deberán desarrollar nuevos marcos conceptuales y analíticos que entiendan la participación en un sentido más amplio y que focalice su atención en cuestiones como las características, los factores explicativos, las posibilidades de *scaling up* o los impactos de todas esas nuevas prácticas de innovación social. El trabajo en el que se encuadra esta introducción, quiere ser precisamente un ejemplo de ello.

¿Y LOS JÓVENES?

En el estudio previo a esta investigación (Equipo IGOPnet, 2014) incorporamos ya algunos elementos (que aquí recogemos en parte), que pueden ahora servirnos para situar el universo de los jóvenes en el escenario hasta aquí descrito. La tradición analítica en las Ciencias Sociales apunta a que el interés de los jóvenes por la política es más bien escaso y, que desde la perspectiva electoral, el porcentaje de participación de los jóvenes es significativamente inferior al del resto de la población. Algunos autores lo explican como consecuencia de una cierta desafección general de la ciudadanía hacia la política (Norris, 1999; Pharr y Putnam, 2000). Mientras que otros apuntan la posibilidad de que los jóvenes se sientan poco atraídos hacia la política “institucional” pero que, en cambio, si estén dispuestos a utilizar otras formas y mecanismos de participación política (Norris, 2002, 2011; Lagos y Rose, 1999). No se trataría por tanto de una cuestión de apatía o de desafección política en general, sino de una clara diferenciación en la forma de relacionarse con la política. En España, algunas investigaciones apuntan que, ya antes de la actual situación de crisis, los jóvenes tendían a protestar más que los adultos (Morales, 2005; Caínzos, 2006).

Todo depende pues de cómo conceptualizamos la “participación política”. Si tendemos a limitarla a prácticas institucionales o extendemos su significado a prácticas no estrictamente institucionales, como las distintas formas de protesta política, el consumo político, la objeción fiscal, la participación en organizaciones políticas no convencionales o el uso político de Internet. En nuestra investigación, hemos querido reflejar ambas formas de participación, relacionándolas con el uso y la incorporación de Internet. No tenemos muchos estudios previos que apunten a ese objetivo, si bien en algunos casos se hablaba de “buenas prácticas” que promovían la participación de los jóvenes a través de Internet (Livingstone, 2003).

Se fueron sucediendo iniciativas por parte de los gobiernos, de la industria, o de las propias organizaciones juveniles, aprovechando el entusiasmo de los jóvenes hacia las nuevas tecnologías digitales (Montgomery, 2008). Los resultados de las evaluaciones realizadas sobre estas iniciativas

(Robles, 2006; Bennett, 2008), evidenciaron una gran distancia entre la voluntad y la retórica de las iniciativas institucionales y la efectiva capacidad de transformación social. En general, se constató que Internet no era más efectivo que los métodos tradicionales para implicar políticamente a los jóvenes desafectos, pero en cambio permitía incrementar la movilización de aquellos jóvenes que ya tenían un interés político (Levine y López, 2004). La lógica era más cercana a entender Internet como nueva herramienta (Poster, 2007), que no una mirada de cambio general del escenario relacional y social.

Si aplicamos elementos propios de la literatura que relaciona la tecnología con los comportamientos sociales (Jasanoff *et al*, 2001; Mongili, 2007), podemos entender que existan dos grandes aproximaciones que acostumbran a usarse en la relación entre Internet y la participación política de los jóvenes: las tecno-deterministas y las voluntaristas. Desde la lógica tecno-determinista se considera que la tecnología condiciona y transforma la participación política, de tal manera que los grupos que más usan Internet (los jóvenes) van a ser los que más participen políticamente. En cambio, desde las visiones voluntaristas se defiende que es la participación política la que guía el uso de la tecnología. Es decir, se cree que los jóvenes que no sean políticamente activos en el escenario analógico, tampoco lo serán en el digital. Y, al mismo tiempo, se argumenta que las formas de participación *online* van a acabar siendo un reflejo de las formas de participación *offline*. Algunos estudios recientes hablan de una combinación de las dos aproximaciones. Argumentan que Internet revitaliza la participación política de los jóvenes pero no desencadena un cambio de viejas a nuevas formas de participación porque la política tradicional ha repensado sus formatos comunicativos para continuar jugando un papel relevante en el uso político que los jóvenes hacen de Internet (Calenda y Meijer, 2009). Pero más bien se constata que el uso que los jóvenes hacen de los sitios web propios de la política tradicional son extremadamente bajos. Se observa que, a diferencia de los adultos, el uso que hacen los jóvenes de Internet está muy desvinculado de la política tradicional (instituciones públicas y partidos) (Soler, 2013).

La conclusión de diversos estudios (Albero, 2010; Banaji y Buckingham, 2010) es que, si bien los jóvenes se preocupan por cuestiones cívico-políticas, sus intereses políticos no coinciden con el de los políticos. Los jóvenes muestran preocupaciones por problemas de carácter colectivo, sobre todo aquellos que les afectan más directamente, y tienen interés por la política (en sentido amplio) en la medida en que se preocupan por la resolución de estos problemas. En cambio, muestran una gran desconfianza y un gran desinterés por la política de partidos y tienen la percepción de que éstos no responden a sus preocupaciones y sus necesidades. Esa concepción de la política, con interés político pero desinterés por la política tradicional, sería el principal factor explicativo del uso político que los jóvenes hacen de Internet.

A partir de las movilizaciones de la primavera árabe, el 15-M o el movimiento *occupy*, en las que los jóvenes y las nuevas tecnologías jugaron un papel muy relevante, algunas investigaciones recientes están centrando su atención en Internet (y sobre todo en las redes sociales) como un mecanismo de movilización de los jóvenes hacia la participación política (Cortés, 2011; VVAA, 2012; Freixa y Nofre, 2013; Iwilde, 2013). Aun así, estos estudios son todavía muy incipientes y es del todo necesario profundizar en el análisis de las relaciones entre los jóvenes, Internet y la participación política.

JÓVENES, PARTIDOS Y MOVIMIENTOS

Cuando se pregunta a la mayoría de la gente (y sobre todo a los más jóvenes) sobre su interés por la política, la respuesta suele ser más bien descorazonadora: se muestran muy poco interesados, la opinión sobre esta actividad es negativa y la reputación de los políticos profesionales está por los suelos. Lo mismo ocurre si se les pregunta sobre su percepción de los partidos políticos. Y lo cierto es que si miramos la evolución histórica de las series de estudios de opinión, esa tendencia no ha hecho sino empeorar.

Los partidos políticos desde su aparición hasta los años setenta del siglo pasado respondieron, entre otras cuestiones, a la necesidad de ofrecer a sus afiliados una identidad que se vinculaba a un espacio de solidaridad, unas actitudes, unos códigos y unos símbolos determinados. En este sentido, durante una buena parte de su historia, los partidos absorbieron y parasitaron otras formas de participación (como por ejemplo diversas prácticas asociativas), que sólo se legitimaban por el hecho de vincularse a una organización partidaria. Estos partidos de naturaleza “integrativa” no sólo pedían el voto o exigían el pago de la afiliación, sino que desarrollaban también una notable influencia en todas las esferas de la vida cotidiana, elaborando identidades colectivas y focalizando aquellos temas que acababan figurando en la agenda política. De esta manera, podríamos decir que ordenaban u organizaban el debate político desde sus mismas raíces. Con ello los partidos ofrecían recursos de identidad tanto a sus élites como —y sobre todo— a sus bases. Tal como expone Cacciagli (1991) aludiendo al caso italiano, estos partidos de masas “generaban un mundo ‘rojo’ o ‘blanco’ donde no sólo se definían las cuestiones políticas, de solidaridad o apoyo mutuo, sino que también elaboraban la identidad de los ‘camaradas’, en la que éstos se reconocían y eran así percibidos por el resto de la sociedad.”

Si comparamos lo que acabamos de describir con la realidad partidaria de hoy, es fácil observar cómo los partidos se han separado notablemente de la sociedad y han concentrado cada vez más su atención en lo que diversos teóricos califican como “tareas eficientes” de la política representativa, es decir: intentar atraer la voluntad mayoritaria de la población, reclutar élites, administrar recursos, formular y llevar a cabo políticas públicas, organizar elecciones periódicas y simbolizar la autoridad. Es posible afirmar por tanto, que, cada vez más, los partidos han ido abandonando su anterior faceta “integrativa” para volcarse en las cuestiones institucionales. Por todo ello, hoy, la participación política cotidiana de los que no forman parte de ese mundo, el surgimiento de nuevos temas o inquietudes, la generación de identidades y la movilización de los ciudadanos son tareas que se han desplazado hacia otro tipo de actores políticos colectivos con más vocación socializadora, y cuya actividad gravita sobre aquellas cuestiones “no eficientes” de la democracia representativa. Y en ese escenario los jóvenes tienen un protagonismo evidente. Los nuevos debates que surgen entre los jóvenes, sus inquietudes, el debate sobre sus identidades, la falta de perspectivas o proyectos y sus malestares cotidianos se han ido desarrollando a espaldas de la dinámica partidaria. Así, las fracturas y los conflictos se han ido redefiniendo a través de preferencias individuales sobre temas específicos que, probablemente, no coinciden con los dilemas habituales presentes en el sistema de partidos ni en el debate electoral y, como resultado de todo ello, se ha ido alejando el mundo de la política convencional del universo de los jóvenes.

En efecto, las perspectivas de futuro son más bien escasas. En el caso de que logren encontrar empleo, en muchos casos su labor está por debajo de sus calificaciones, y casi siempre sus condiciones laborales están muy por debajo (en salario y en continuidad) con las de las personas de más de 35 o 40 años. La dualidad del mercado laboral es evidente y ello hace que no se sientan tampoco especialmente atraídos por unos sindicatos vistos como organizaciones que defienden a los ya instalados (en grandes empresas o en el sector público).

En la medida en que Internet pone en cuestión los equilibrios existentes, erosiona la estabilidad de las empresas y administraciones, propicia de alguna manera la apertura de nuevos espacios de actividad, nuevas oportunidades disponibles para aquellos que las sepan utilizar. Sobre todo, aquellos que tienen más conocimiento y más facilidad para usar las nuevas herramientas, y que están mejor dispuestos a aceptar la meritocracia más que la tradición, la horizontalidad más que la jerarquía, y el trabajo en red más que la especialización segmentada. Y ello es así, no sólo en la actividad profesional en general, sino también en la actividad política de nuestros días.

La dinámica expuesta ha dado como fruto dos fenómenos en apariencia opuestos. Por un lado, el incremento de la distancia, apatía y cinismo de los ciudadanos en general y de los jóvenes en particular frente a la actividad política (y partidaria) y, por otro, la revitalización de espacios de activación política que canalizan el interés de los jóvenes por lo público a partir de una lógica movimentista: no convencional, con escasos contactos institucionales, sin una organización rígida, con un discurso de fuerte contenido ético y con una notable carga identitaria. De esta forma una posible hipótesis a desarrollar es que el vacío que poco a poco han ido dejando los partidos políticos tradicionales ha ido siendo ocupado por un archipiélago de organizaciones y entramados sociales que, por convención, podemos denominar movimientos sociales, pero que no acaban de responder a los parámetros con que tradicionalmente la academia los ha analizado.

Desde hace ya algunos años, uno de los activos más importantes de las nuevas experiencias de acción colectiva ha sido su continuada creatividad para generar nuevas formas de articulación y acción con las cuales comunicar y transmitir demandas, generar solidaridad e identidad entre sus miembros y, sobre todo, desafiar a sus adversarios. Así, los movimientos que hoy centran nuestro interés han incorporado al "repertorio" de acción colectiva tradicional formas nuevas que, al ser aprendidas, experimentadas, vividas y asimiladas han terminado por integrarse en la nueva cultura política. En este sentido cabe destacar la incorporación de tecnologías como Internet (que supuso ya hace muchos años la aparición de la primera "guerrilla virtual" ubicada en las profundidades de la selva Lacandona y con ésta cientos de Comités de Solidaridad con Chiapas y los zapatistas), o la convocatoria de miles de jóvenes en las ciudades donde se celebraron foros internacionales con el objetivo de bloquearlos, tal como se observó en Seattle, Washington, Praga, Niza o Davos donde gentes disfrazadas de tortugas ninja, de árboles, o vestidos de *tutte bianchi* actuaban como "nubes de mosquitos" en los accesos de los edificios donde se desarrollaban las convenciones o en los hoteles en que los funcionarios internacionales se alojaban. Esos son, sin duda, precedentes muy significativos de los actuales formatos de acción política y ahí es donde pueden rastrearse los orígenes y primeras acciones de muchos de los referentes actuales de lo que algunos llaman "nueva política".

Para que este tipo de acciones tuvieran trascendencia, aquellos movimientos sociales, fuertemente protagonizados por jóvenes, tuvieron que aprender a generar una relación simbiótica con los medios de comunicación de masas (con todas sus ventajas e inconvenientes). Así, como resultado de esta dinámica, la mayoría de movimientos presentes en el tejido social han experimentado los efectos de la lógica de los *mass media* en sus repertorios de acción colectiva. Una vez convenidos que el éxito o el fracaso de la protestas o acciones está condicionada por el interés que muestren los medios sobre las mismas no cabe duda que la organización, el repertorio, el discurso y la simbología de los movimientos se ha adaptado a la nueva realidad mediática tal como lo ejemplifican muchas acciones paradigmáticas de los últimos años. Pero, al mismo tiempo, con la difusión y generalización de los instrumentos propios de la Web 2.0, estos movimientos han sido capaces de generar sus propios contenidos, de propiciar su propia agenda comunicativa, utilizando de manera intensiva y profesional las capacidades y potencialidades de las redes sociales y la democratización de los instrumentos de difusión.

En cuanto a tamaño y organización, los movimientos sociales que están en el origen de las nuevas configuraciones políticas, tendieron a articularse en forma de maraña entrelazada de pequeños grupos, redes sociales y con múltiples conexiones. El desencanto de los nuevos y jóvenes activistas con los formatos tradicionales de encuadramiento, daba una extraordinaria importancia a las lógicas asamblearias, horizontales, sin jerarquía y sin delegación. En muchos casos se empezaba con ámbitos sociales de micro-movilización, que era donde se establecían los vínculos a partir de los cuales la gente se comprometía, generaba lazos y decidía emprender determinadas movilizaciones. Lo que iba estando en juego era la voluntad de crear organizaciones que fueran suficientemente firmes como para persistir, pero al mismo tiempo lo bastante flexibles como para cambiar con arreglo a las circunstancias y nutrirse de la energía de sus bases, en un contexto en el que generalmente no existía un cuadro permanente de activistas. Es en ese contexto en el que se han señalado las ventajas que ofrece Internet a ese peculiar entorno organizativo, ya que permite vínculo sin lazo fuerte, latencias que se activan cuando surge la oportunidad, compartir recursos a distancia, etc.

Es ya un lugar común exponer que hoy la mayor parte de movimientos sociales del mundo utilizan Internet como una forma privilegiada de acción y de organización. Internet confiere a los movimientos una capacidad de comunicación que permite la flexibilidad y la temporalidad de la acción, manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de debatir los distintos enfoques de esa movilización. Permite también la difusión extensiva de códigos culturales y de valores a través de la transmisión instantánea de ideas en un marco que posibilita la coalición y la agregación. Y permite finalmente proponer estrategias de resistencia a temas globales en ámbitos o sociedades locales, sin peligro de aislamiento. Hace ya años que se percibió (Castells, 1998) que Internet permitía convertir en relevantes las experiencias cotidianas en el resto del mundo y hacer posible su articulación con muchas otras protestas que acababan aterrizando en cualquier otro lugar.

Otra de las características de los nuevos formatos de acción y movilización política de los jóvenes que ha ido consolidándose a lo largo de estos últimos diez años, es la capacidad de "generar discurso". Es decir, la capacidad de construir "concepciones" compartidas. No basta con que se

den las condiciones objetivas para que se produzca un proceso de movilización política. Es necesario que se dé la conciencia de esa situación y una cierta capacidad de construir un discurso que relaciona la acción política con una perspectiva de solución o mejora. En este sentido, lo significativo de la última oleada de movilizaciones contra la crisis económica y sus efectos ha sido la capacidad de conseguir que se viera como injusto lo que para algunos era simplemente una situación desafortunada. Una tarea fundamental ha sido pues convencer de que las indignidades de la vida cotidiana no responden a un designio fatal, ni están escritas en las estrellas, sino que pueden ser atribuidas a alguna política, autoridades o grupo de interés, y que, por tanto, pueden cambiarse o modificarse por medio de la acción colectiva.

En este sentido, Internet ha dado la posibilidad a los nuevos movimientos y grupos de acción política a desafiar a gran escala (vía redes sociales) un discurso dominante que tendía a considerar como inevitable o imposible de modificar la realidad circundante. Lo normal fue y sigue siendo considerar que ese tipo de movilizaciones son muy arriesgadas, sirven para muy poco o que acaban provocando efectos contrarios a los que se buscaban. Es lo que Hirschman (1991) denominó como “retórica intransigente”. En efecto, la retórica intransigente apela a tres temas fundamentales: el riesgo, la futilidad y los efectos perversos. El riesgo supone exponer que cada vez que intentamos cambiar algo se corre el peligro de perder lo que ya se tiene, y que por tanto, la inactividad es la postura más prudente puesto que el riesgo de perder lo acumulado es mucho más previsible que las posibles ganancias. La futilidad expresa que no existen oportunidades de cambio y, desde esta óptica, cualquier tipo de acción no es sino una pérdida de tiempo y recursos. Y los efectos perversos están relacionados con la idea de que cualquier tipo de actuación pensada para el cambio no hará sino empeorar las cosas. Es a esa “retórica intransigente” a la que se ha sido capaz de levantar una “retórica de la movilización” que en España ha simbolizado el lema “Sí se puede”.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestra investigación, por tanto, se plantea analizar de manera concreta, cómo se está materializando este cambio de época, esta nueva manera de entender la acción política por parte de los jóvenes y de los nuevos movimientos sociales surgidos en los últimos años. Para ello hemos tratado de ver tanto el impacto que ha tenido ese cambio de escenario en las organizaciones políticas ya existentes. Y, por otro lado, cómo se han ido conformando las nuevas plataformas, movimientos y organizaciones políticas surgidas ya desde los parámetros tecnológicos y de articulación distinta que hemos venido comentando.

En este sentido, las cuestiones relevantes a las que hemos tratado de buscar respuesta tienen que ver con nuevas maneras de entender la intermediación y representación política; el desbordamiento de los escenarios tradicionales en los que se encajaba la política de corte institucional; como se logran operacionalizar formatos más directos de decisión y participación en el funcionamiento de las nuevas estructuras organizativas; el uso de las redes sociales más allá de las dinámicas de información y comunicación; la capacidad de poner en práctica lógicas más horizontales que permitan el acercamiento de personas y colectivos “no expertos” en el debate

y la acción política; o el grado en que se puede hablar de nuevas formas de liderazgo y de implicación activista.

En el sustrato de nuestra investigación está la duda de si podemos hablar realmente de cambios en los formatos de representación y de hasta qué punto todo ello apunta a nuevos protagonistas de los jóvenes y de otros colectivos tradicionalmente alejados de la política institucional. En el fondo, queremos contribuir al debate que está planteado en todo el mundo acerca de la capacidad de la democracia de adaptarse y aprovechar los nuevos escenarios tecnológicos y de globalización.

BIBLIOGRAFÍA

Albero, M. (2010). *Internet, jóvenes y participación cívica política*. Barcelona: Octaedro.

Banaji, S. y Buckingham, D. (2010). "Young People, the Internet, and Civic Participation: An Overview of Key Findings from the CivicWeb Project". *International Journal of Learning and Media*, 2(1): 15-24.

Bennett, W. L. y Segerberg, A. (2012). "The Logic of Connective Action". *Information, Communication & Society*: 1-30. doi: 10.1080/1369118X.2012.670661.

Bennett, W. L. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*. Mit Press.

Cacciagli, M. (1991). *¿Condenada a gobernar? La democracia cristiana en el sistema político*. WP, ICPS, 41. Barcelona

Caínzos, M. A. (2006). "Participación de los jóvenes españoles en manifestaciones. Comparación con los jóvenes europeos y análisis de sus determinantes". *Revista de Estudios de Juventud* (75): 121-153.

Calenda, D. y Meijer, A. (2009). "Young people, the Internet and political participation". *Information, Communication and Society*, 12(6): 879-896.

Castells, M. (1998). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Vol. 2. Madrid: Alianza.

Cortés, P. (2011). "Redes sociales: ¿Apoyo o boicot para la participación política?" *Congreso AECPA*, Murcia, 7-9 septiembre.

Equipo IGOPnet (2014). *Jóvenes, Internet y política*. Madrid: FAD-CRS. Disponible en: <http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-politica> (12 marzo 2015).

Freixa, C. y Nofre, J. (2013). *#Generación Indignada*. Barcelona: Milenio Editorial.

Fuster Morell, M. (2010). *Governance of Online Creation Communities: Provision of Infrastructure for the Building of Digital Commons*. Tesis disponible: <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14709> (13 marzo 2015).

- Hirschman, A. (1991). *The Rethoric of reaction*. Cambridge: Harvard University Press.
- Iwilade, A. (2013). "Crisis as Opportunity: Youth, Social Media and the Renegotiation of Power in Africa", *Journal of Youth Studies*. <http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2013.772572>
- Jasanoff, S.; Markle, G. E.; Peterson, J. C. y Pinch, T. (2001). *Handbook of Science and Technology Studies*. SAGE Publications.
- Jellinek, G. (1978). *Fragmentos de Estado*. Madrid: Civitas.
- Lagos, M. y Rose, R. (1999). "Young People in Politics: a Multi-Continental Survey". *Studies in Public Policy-University of Strathclyde Centre for the Study of Public Policy*.
- Levine, P. y Lopez, M. H. (2004). "Young People and Political Campaigning on the Internet". Fact Sheet. <http://www.eric.ed.gov>, 80. disponible en: <http://www.civicyouth.org/PopUps/CampaigningonInternet.pdf> (13 marzo 2015).
- Livingstone, S. (2003). "Children's Use of the Internet: Reflections on the Emerging Research Agenda". *New Media & Society*, 5(2): 147-166.
- Mongili, A. (2007). *Tecnologia e società*. Roma: Carocci.
- Montgomery, K. C. (2008). "Youth and Digital Democracy: Intersections of Practice, Policy, and the Marketplace". *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*, 1: 25-49.
- Morales, L. (2005). "¿Existe una crisis participativa? La evolución de la participación política y el asociacionismo en España". *Revista Española de Ciencia Política*, 13: 51-87.
- Norris, P. (1999). "Introduction: the Growth of Critical Citizens?". *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*: 1-27.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Critical Citizens Revisited*. 2011th ed. Cambridge Univ Press. Disponible en: <http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Books/Critical%20Citizens%20Revisited.htm> (20 septiembre 2011).
- Pharr, S. J. y Putnam, R. D. (2000). *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton University Press.
- Poster, M. (2007). "Internet Piracy as Radical Democracy". *Radical Democracy and the Internet: Interrogating Theory and Practice*: 207-225.
- Robles, J. M. (2006). "Los jóvenes y las nuevas formas de participación política a través de Internet". *Revista de Estudios de Juventud* (75): 155-169.
- Salcedo, J. L. (2012). *La visibilidad mediática de actores políticos en la red. La política de gestión de contenidos digitales y la propiedad intelectual en España y en el Reino Unido*. [info:eu-repo/se](http://info.eu-repo/se)

mantics/tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/96483> (21 novembre 2013).

Soler, R. (2013). *Democràcia, participación i joventut. Una anàlisi de l'Enquesta de participación i política 2011*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Subirats, J. (2011). *Otra sociedad. ¿Otra política?* Barcelona: Icaria.

VVAA (2012). *Tecnopolítica, Internet y R-evoluciones. Sobre la centralidad de redes digitales en el #15M*. Barcelona: Icaria.